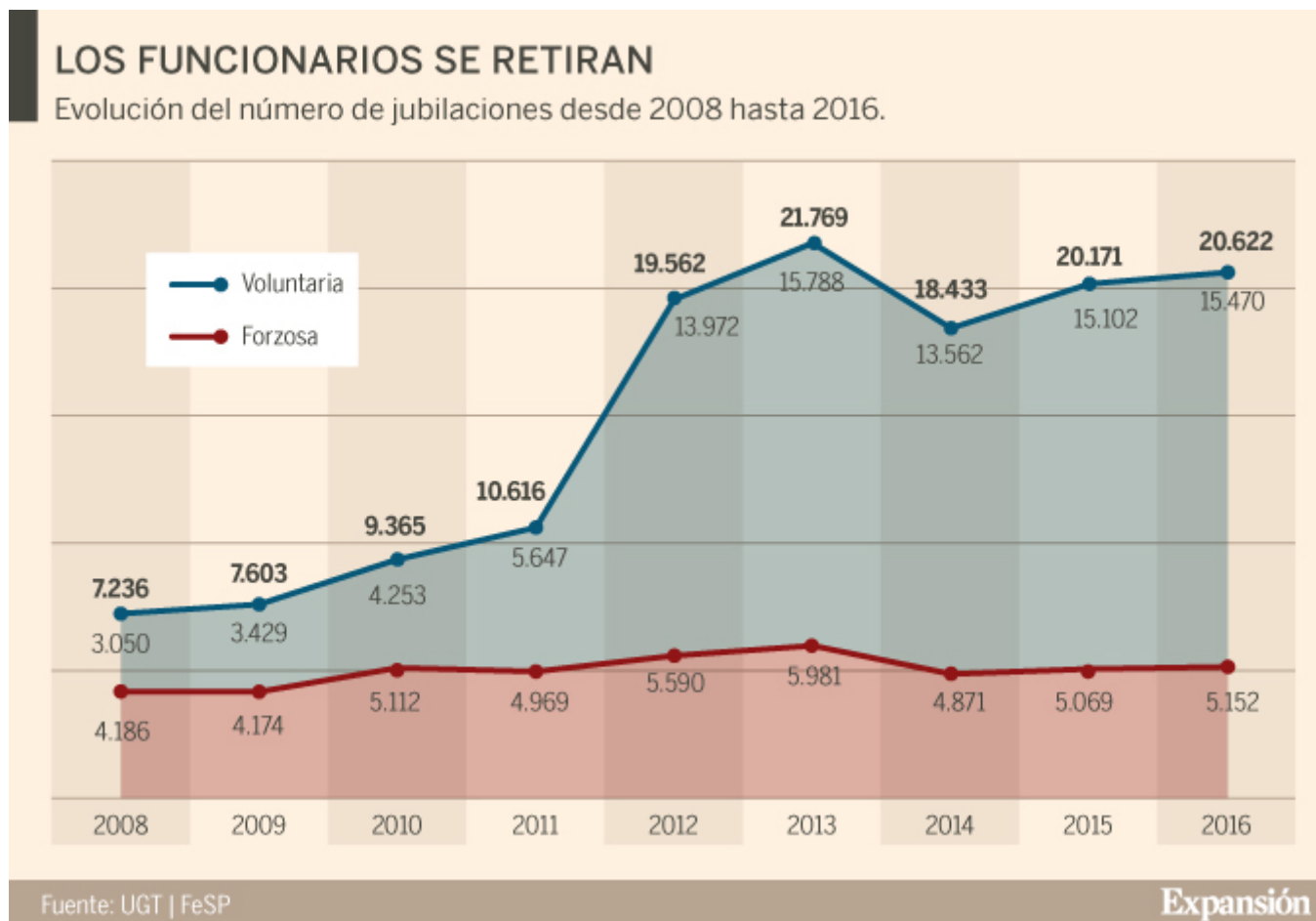


La jubilación anticipada de los funcionarios del Estado se quintuplicó tras la crisis económica



Marga Castillo
C. Galera
08/02/2018

La jubilación anticipada voluntaria de los funcionarios del Estado se quintuplicó en los peores años de la crisis económica: pasan de unas 3.000 en 2008 a más de 15.000 en 2016.

Las jubilaciones anticipadas entre los funcionarios pertenecientes al régimen especial de clases pasivas de la Administración General del Estado (AGE), único colectivo que puede acceder a ella, crecieron exponencialmente entre 2008 y 2013.

Mientras que en 2008 se acogieron a la jubilación anticipada voluntaria 3.050 funcionarios, cinco años después esta cifra se había más que quintuplicado, hasta las 15.788.

Tras el pico máximo de jubilaciones anticipadas voluntarias en 2013, las cifras se han mantenido estables desde ese ejercicio hasta 2016, año en el que el total de jubilaciones anticipadas se situó en 15.470, según los datos hechos públicos este martes por la Federación de Empleadas y Empleados de Servicios Públicos (FeSP) de UGT (FeSP-UGT) a partir de la estadística de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos.

Este aumento coincide con los recortes emprendidos por el Gobierno con motivo de la crisis económica que supusieron para el colectivo funcionalarial una bajada de sueldos en 2010, una congelación en 2011 y la supresión de la paga extra en 2012, apunta el sindicato.

Incertidumbre

Para Carlos Álvarez, secretario de AGE de la FeSP-UGT, esta situación es, en gran parte, resultado del alto grado de desmotivación generada por los continuos recortes y la falta de perspectivas profesionales.

El responsable sindical agrega en un comunicado que los empleados de la AGE suman un 13% de pérdida de poder adquisitivo y una drástica disminución en la Oferta Pública de Empleo Público.

Estos factores se suman a la "falta de implantación de la carrera profesional; la inexistencia de formación para el empleo desde hace dos años; las enormes dificultades para acceder a los procesos de promoción interna; la falta de configuración del Grupo B surgido del Estatuto Básico del Empleado Público y una gran incertidumbre sobre el futuro de las pensiones que padece este colectivo".

Desde 2010 hasta 2016, los jubilados y jubiladas de AGE ascienden a 120.538, al sumar jubilación anticipada voluntaria y la jubilación forzosa.

En opinión del sindicato, "éste es un paso más hacia la descapitalización en materia de recursos humanos de la AGE, sin que el Gobierno adopte medidas correctoras".

Una Administración envejecida

La situación se agravará en los próximos años, subraya UGT, ya que el 65,7% de los funcionarios de la AGE tienen más de 50 años y, de éstos, 91.694 están en el umbral de los 60.

Álvarez denuncia que el Gobierno, además de aumentar la temporalidad, ha recurrido a "una exagerada externalización de servicios", y cita el último dato publicado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, correspondiente a 2016, año en que se efectuaron 7.755 concesiones por un importe de casi 7.000 millones de euros.

"La única medida adicional que han adoptado es la firma del Acuerdo Gobierno-Sindicatos de 29 de marzo de 2017 que, aunque servirá para reducir la temporalidad existente y evitar la destrucción de más empleo público, no generará el empleo público neto necesario para rejuvenecer plantillas".